

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	LUIS FERNANDO TABORDA ALZATE
DEMANDADO	COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-012-2019-000393-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Pensión de sobrevivientes, causación, principio de la condición más beneficiosa.
DECISIÓN	Confirma

Medellín, dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede la Sala a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por el señor **LUIS FERNANDO TABORDA ALZATE** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 054**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ANTECEDENTES

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación presentado por la apoderada judicial del demandante, contra la sentencia que profirió el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín - Antioquia, en la audiencia pública celebrada el día 22 de septiembre de 2022, dentro del proceso referenciado, y a su vez conocer dicha sentencia en Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, de conformidad al artículo 69 del CPT y SS.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que la señora GLORIA BEATRIZ ZULUAGA JARAMILLO estuvo afiliada para riesgos de invalidez, vejez y muerte al Instituto de los Seguros Sociales, realizando cotizaciones entre el 5 de junio de 1984 hasta el 30 de septiembre de 2010 acreditando 777,43 semanas cotizadas.

Refiere el introductorio que la señora ZULUAGA JARAMILLO contrajo matrimonio por el rito católico con el señor LUIS FERNANDO TABORDA ALZATE, el 09 de noviembre de 1996, y que la convivencia duró hasta el 17 de diciembre de 2013, época en la cual falleció la citada señora. Durante la relación procrearon dos hijos de nombres CAMILO y DIANA MARCELA TABORDA ZULUAGA, quienes nacieron el 09 de marzo de 1994 y 26 de junio de 1989 respectivamente.

Se expresó además que con ocasión al fallecimiento de la señora GLORIA BEATRIZ ZULUAGA JARAMILLO, su esposo presentó el 28 de febrero de 2014 el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, la cual fue negada mediante acto administrativo GNR 193911 del 29 de mayo de 2014, a través del cual COLPENSIONES señaló que la afiliada no dejó causada pensión de sobrevivientes bajo los parámetros de la ley 797 de 2003, por cuanto no acreditaba 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a su fallecimiento.

Narra la demanda que el 19 de marzo de 2019, nuevamente el señor LUIS FERNANDO TABORDA ALZATE solicitó ante COLPENSIONES el reconocimiento de la pensión bajo la aplicación del Decreto 758 de 1990 y de la

condición más beneficiosa, sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda no ha obtenido respuesta.

Por último, se aduce que la señora GLORIA BEATRIZ ZULUAGA JARAMILLO, acredita en toda su vida laboral 777,43 semanas cotizadas, de las cuales 365,01 semanas lo fueron antes del 1 de abril de 1994, por lo que se afirma, que la causante dejó causada la pensión de sobrevivientes a favor de su esposo, bajo los parámetros del Decreto 758 de 1990 y del principio de la condición más beneficiosa.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que SE DECLARE que al señor LUIS FERNANDO TABORDA ALZATE le asiste derecho al reconocimiento a la pensión de sobrevivientes ocasionada por el fallecimiento de su esposa GLORIA BEATRIZ ZULUAGA JARAMILLO, en aplicación del Decreto 758 de 1990 y en virtud del principio de la condición más beneficiosa.

Que se CONDENE a COLPENSIONES a reconocer y pagar al señor LUIS FERNANDO TABORDA ALZATE, la pensión de sobrevivientes, desde el momento en que falleció su cónyuge, incluyendo las mesadas adicionales, teniendo en cuenta el aumento anual conforme al porcentaje del IPC de cada año.

Que se CONDENE a COLPENSIONES al reconocimiento de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, sobre las sumas reconocidas conforme al numeral anterior o en subsidio a la indexación, y las costas procesales.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

COLPENSIONES dio respuesta oportuna a través de su apoderado judicial, según consta en el archivo PDF N° 08, obrante en el expediente digital, aceptando como ciertos los siguientes hechos: La afiliación de la señora GLORIA BEATRIZ ZULUAGA JARAMILLO, al ISS hoy COLPENSIONES. El fallecimiento de la señora ZULUAGA JARAMILLO y la solicitud y negativa de la pensión de

sobrevivientes. En relación con el hecho séptimo se expresó que es parcialmente CIERTO, pues el accionante presento el 19 de marzo de 2019 solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, precisando que no es cierto que Colpensiones no dio respuesta a la solicitud, ya que el día 20 de marzo de 2019 se le dio respuesta de la siguiente manera: *“Le comunicamos, que una vez validadas nuestras bases de datos se evidenció que mediante resolución GNR 65054 del 29 de febrero de 2016, COLPENSIONES reconoció y ordenó el pago por una sola vez de una indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes al señor Luis Fernando Taborda Álzate, con ocasión del fallecimiento de la señora Zuluaga Jaramillo Gloria Beatriz, la cual ya fue pagada por la entidad”*.

La entidad se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas, proponiendo en su defensa las excepciones de mérito que denominó: *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER Y PAGAR PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER Y PAGAR LOS INTERESES DE MORA, IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN DE LAS CONDENAS, PRESCRIPCIÓN, COMPENSACIÓN, BUENA FE, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS, DESCUENTOS DEL RETROACTIVO POR SALUD, PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS”*

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En el fallo objeto de apelación, la A Quo en audiencia pública de juzgamiento, celebrada el 22 de septiembre de 2022, ABSOLVIÓ a COLPENSIONES de las pretensiones incoadas en su contra por el señor LUIS FERNANDO TABORDA ÁLZATE y condenó en costas procesales al demandante y a favor de Colpensiones en la suma de \$500.000.

Como fundamento de su decisión, estimó la juez de primer grado que la afiliada fallecida GLORIA BEATRIZ ZULUAGA JARAMILLO, no dejó causado el derecho a una pensión de sobrevivientes a favor de sus eventuales beneficiarios, pues si bien, contaba con un considerable número de semanas cotizadas, estas le fueron insuficientes para causar una pensión de vejez en los términos del art. 9° de la Ley 797 de 2003, pues solo reunió 777,43 semanas, de las 1.300 semanas exigidas por dicha normativa, y tampoco era beneficiaria del régimen

de transición previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993, por contar con 365,01 semanas, al 1° de abril de 1994.

Y en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, bajo el primigenio art. 46 de la Ley 100 de 1993, indicó el fallador de instancia, que no resultaba factible la causación del derecho pensional bajo esta opción, toda vez que la afiliada, falleció después del año 2006, es decir, por fuera del rango de temporalidad fijado por la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia.

Finalmente manifestó la A quo, que a pesar del doble salto normativo permitido por la Corte Constitucional, para la aplicación del Decreto 758 de 1990 que permite la causación del derecho a una pensión de sobrevivientes con 300 semanas de cotización, el demandante no acreditó siquiera la primera condición exigida en el TEST DE PROCEDENCIA contenido en la sentencia SU-005 de 2018, habiéndose sustraído en el análisis de las restantes cuatro condiciones.

VI. – RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

La apoderada judicial de la parte demandante manifestó su inconformidad frente a lo resuelto en la primera instancia, y sustentó su alzada en los siguientes términos.

Argumentó la togada que el afiliado LUIS FERNANDO TABORDA ÁLZATE, sí dejó causada una pensión de sobrevivientes al reunir la densidad de cotizaciones exigida en el Decreto 758 de 1990, lo anterior, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, pues quedó acreditado en el plenario, que el demandante y la señora Gloria contrajeron matrimonio por el rito católico en el año 1996, compartiendo techo, lecho y mesa, hasta la fecha de su deceso en el año 2013.

Expresó que la pensión de sobreviviente contemplada en el Decreto 758 de 1990, exige que el asegurado haya reunido una densidad de cotizaciones de 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o 300 semana, en cualquier época con anterioridad al estado de invalidez; y en el caso en concreto de la señora Gloria, dejó acreditadas más de 300 semanas cotizadas a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, razón por la cual y con

fundamento en la sentencia SU 442 de 2016, debe aplicarse los criterios de favorabilidad de la condición más beneficiosa, que en este evento es el Decreto 758 de 1990, pues esta condición no se restringe al aplicar la normativa anterior, sino que se extiende a cualquier otro esquema normativo anterior cuyo amparo o beneficiario tenga una expectativa legítima concebida conforme a la jurisprudencia. Igualmente se tiene la sentencia T 464 de 2016, en donde se dejó establecido que la Corte Constitucional guarda un precedente respecto del principio de la condición más beneficiosa en materia de la pensión de sobrevivientes, permitiendo esta Corporación aplicar el Acuerdo 049 de 1990, cuando se prueba que el causante ha cumplido con el número de semanas exigidas durante el término de su vigencia.

Concluyó afirmando que en el asunto se dan los presupuestos normativos para revocar la sentencia de primer grado, aplicando el Decreto 758 de 1990, y resaltando que pese a que el actor accedió a la indemnización sustitutiva, no es óbice para desestimar las pretensiones, por lo que solicita que se acceda a las pretensiones y se condene a Colpensiones al reconocimiento y pago de los intereses moratorios.

Alegatos de conclusión.

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente los apoderados judiciales de ambas partes presentaron sus alegatos de conclusión en segunda instancia.

La **parte demandante** pidió revocar íntegramente la sentencia de primera instancia condenando a Colpensiones al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivencia y al pago de los intereses moratorios por el retardo injustificado en el reconocimiento de la pensión de vejez.

Expresó la recurrente que para la Honorable Corte Constitucional es posible en eventos como el presente, aplicar un régimen precedente que está derogado, incluso si la normativa a emplear no es la inmediatamente anterior, siempre que se cumpla con el requisito de densidad de semanas en vigencia del régimen anterior; por lo anterior es viable invocar la condición más beneficiosa para inaplicar la Ley 797 del 2003, en vigencia de la cual fallece la señora Gloria Beatriz Zuluaga, y conceder así el derecho, en virtud de lo dispuesto por el

Decreto 758 de 1990, por cuanto está probado en el proceso que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se aportaron 300 semanas en cualquier tiempo y más de 700 en toda la vida laboral.

Aseguró además que de conformidad con lo señalado en la Sentencia SU 442 de 2016 el principio de la condición más beneficiosa no se restringe exclusivamente a admitir u ordenar la aplicación de la norma inmediatamente anterior a la vigente, sino que se extiende a todo esquema normativo anterior bajo cuyo amparo el afiliado o beneficiario haya contraído una expectativa legítima, concebida conforme a la jurisprudencia.

Por otro lado, dijo que el asunto no se analizó por parte de la entidad, ni por el juez de primera instancia, a la luz del parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, situación que evidencia la inobservancia, incluso de jurisprudencia que ha sido emitida por la misma Corte Suprema de Justicia, en donde en casos como el presente ha permitido el acceso a la pensión de sobrevivientes, enfatizando que el proceso debe ser enjuiciado bajo las consideraciones de la sentencia SL 7358 de 2014 Radicación N° 46780 del 11 de junio de 2014, la sentencia T – 464 del 29 de agosto de 2016, y la sentencia SU 005 de 2018 de la H. Corte Constitucional.

Finalmente señaló que en sentencia SL 11234-2015 - Radicación N° 45857 del 26 de agosto de 2015, la Corte Suprema de Justicia, indica que, a pesar de haberse reconocido indemnización sustitutiva de pensión de vejez a un fallecido titular de esa prestación, no impide a sus beneficiarios solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

El apoderado judicial de **COLPENSIONES**, por su parte manifestó que la señora GLORIA ZULUAGA acreditó un total de 732 semanas, para el 17 de diciembre de 2013 día de su fallecimiento, por lo que le es aplicable lo dispuesto en la ley 797 de 2003, advirtiendo que la causante debió cotizar 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores al fallecimiento, es decir, entre el 17 de diciembre de 2010 y el 17 de diciembre de 2013, no cumpliendo así este requisito ya que la última cotización se dio el 30 de septiembre de 2010, de acuerdo a lo reportado en la Historia Laboral de Colpensiones.

Respecto a la aplicación de la condición más beneficiosa, se señaló que:

(i) No es posible la aplicación plusultrativa de normas, solo es procedente valerse de la inmediatamente anterior, como se establece en la Sentencia SL1938/20 (ii) El principio de condición más beneficiosa tiene un límite de temporalidad: como se establece en la Sentencia SL2358/17 (iii) Debe existir una expectativa legítima al momento del cambio legislativo- sentencia SL4009/19.

Aseguró que al aplicar el artículo 46 de la ley 100 de 1993, se constata que al no haber realizado cotizaciones al sistema para el momento de su fallecimiento se le aplicaría el literal B, que establece que, habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte, lo que en este caso no se aplicaría pues la última cotización al sistema data del 20 de septiembre de 2010.

Ahora bien, como el demandante solicitó la aplicación al principio de la condición más beneficiosa teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 758 de 1990, es decir la aplicación plusultrativa de normas, para el caso que nos ocupa tampoco es posible dar este salto normativo, toda vez que la honorable Corte Constitucional, inicialmente posibilitó la aplicación de la condición más beneficiosa para pensiones de sobrevivientes antes del tránsito legislativo de mayor complejidad, acreditando únicamente el requisito de la densidad superior a 300 semanas cotizadas al 1 de abril de 1994. Este criterio se cambió totalmente en la sentencia SU 005 del año 2018, pues enfatizó que no era posible hacer extensiva la sentencia de unificación 442 de 2016, que trataba la procedencia de la aplicación de la condición más beneficiosa en las pensiones de invalidez al caso de la pensión de sobrevivientes.

Explicó además que la aplicación ultractiva de las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, o de regímenes anteriores en lo relativo al requisito de las semanas de cotización a efectos de estudiar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por la muerte de un afiliado en vigencia de la Ley 797 de 2003, se limita a aquellos beneficiarios que pretenden acceder a la prestación económica de sobrevivientes y que ostentan la condición de personas en estado de

vulnerabilidad. Para determinar los sujetos aplicables de la condición más beneficiosa por ser personas de especial protección, describió un test con 5 condiciones que se deben cumplir todas a cabalidad, y de esta manera sería procedente el reconocimiento de la aplicación de la condición más beneficiosa. Para este caso, el demandante no cumplió con las condiciones de dicho test pues de acuerdo con sus declaraciones no es una persona en estado de vulnerabilidad, por lo que no es posible acceder a la prestación, y de esta manera se solicita se confirme en su totalidad el fallo de primera instancia.

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión. – Pensión de sobrevivientes, causación, aplicación del principio de la condición más beneficiosa en materia pensional. Teniendo en cuenta los puntos objeto de apelación, mismos que delimitan la competencia de esta Sala en la segunda instancia, los problemas jurídicos estriban en dilucidar, **I)** si la afiliada fallecida GLORIA BEATRIZ ZULUAGA JARAMILLO, dejó causado el derecho a una pensión de sobrevivientes a favor de sus eventuales beneficiarios, **II)** y si el demandante logró acreditar los requisitos legales para ser considerado beneficiario de la prestación económica que por esta acción judicial reclama, **III)** y solo en caso afirmativo pasará la sala a establecer la fecha de disfrute pensional, el retroactivo adeudado, la procedencia de los intereses moratorios y/o la indexación de las condenas.

Para el análisis del caso y en los términos del artículo 16 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual precisa que las normas sobre trabajo, por ser de orden público producen efecto general inmediato, las disposiciones llamadas a regir el presente asunto son los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993,

modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, atendiendo la fecha del fallecimiento del afiliado.

Valga la pena advertir que en el presente asunto no resultan objeto de controversia los hechos relativos a **i)** la muerte de la afiliada GLORIA BEATRIZ ZULUAGA JARAMILLO, insuceso acaecido el 17 de diciembre de 2013, y **ii)** el vínculo matrimonial con el demandante LUIS FERNANDO TABORDA ÁLZATE que data del 09 de noviembre de 1996, hechos que se prueban con los registros civiles de defunción y matrimonio visibles en el PDF 02 folios 19 a 21 del expediente.

Por lo tanto, procederá la Sala a analizar el primer problema jurídico planteado, esto es, si la afiliada GLORIA BEATRIZ ZULUAGA JARAMILLO, dejó causado o no el derecho pensional en favor de sus eventuales beneficiarios, al respecto debe tenerse en cuenta lo previsto en el numeral 2° del art. 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 12 de la ley 797 de 2003, que era la normatividad vigente al momento del fallecimiento de la afiliada, veamos:

*“2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado **cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento...**”*

Teniendo en cuenta la densidad mínima de cotizaciones exigida en el citado precepto legal, esta Sala procedió a revisar la HISTORIA LABORAL de la afiliada, obrante en el PDF 08 folios 59 del plenario, encontrando que la señora GLORIA BEATRIZ ZULUAGA JARAMILLO tenía en su haber 0 semanas cotizadas entre el 17 de diciembre de 2010 y el 17 de diciembre de 2013, esto es en los 3 años anteriores a su deceso, teniendo en cuenta que su fallecimiento se produjo el **17 de diciembre de 2013**, pues la afiliada acredita un total de 777,43 semanas cotizadas entre el 5º de junio de 1984 y hasta el 30 de septiembre de 2010.

Nombre:
Dirección:
Estado Afiliación:

GLORIA BEATRIZ ZULUAGA JARAMILLO
CALLE 48A # 102A 38
Retirado por fallecimiento

Correo Electronico:
Ubicación:

girobezuja@hotmail.com

RESUMEN DE SEMANAS COTIZADAS POR EMPLEADOR

En el siguiente reporte encontrará el total de semanas cotizadas a través de cada uno de sus empleadores o de sus propias cotizaciones como trabajador independiente, es decir, las que han sido cotizadas desde enero de 1967 a la fecha. Recuerde que la Historia Laboral representa su vida como trabajador, la que usted ha construido mes a mes y año a año.

[1]Identificación Aportante	[2]Nombre o Razón Social	[3]Desde	[4]Hasta	[5]Último Salario	[6]Semanas	[7]Lic	[8]Sim	[9]Total
2012403561	CARLOS MARIO MADRID	05/06/1984	24/01/1985	\$14.610	33,43	0,00	0,00	33,43
4016114509	DISENOS Y CREAC VELS	12/02/1985	08/05/1986	\$17.790	64,43	0,00	0,00	64,43
2016401604	ARRENDAMIENTOS EL FU	30/01/1987	18/01/1989	\$39.310	102,86	0,00	0,00	102,86
2017108384	ESCUELA DE CONDUCCIO	08/03/1989	30/04/1992	\$70.260	164,29	0,00	0,00	164,29
800137900	DISUCO LTDA	01/09/1997	30/09/1997	\$178.000	3,29	0,00	0,00	3,29
800137900	DISUCO LTDA	01/10/1997	31/01/1998	\$233.000	17,14	0,00	0,00	17,14
800137900	DISUCO LTDA	01/02/1998	28/02/1998	\$320.000	4,29	0,00	0,00	4,29
800137900	DISUCO LTDA	01/03/1998	31/03/1998	\$276.375	4,29	0,00	0,00	4,29
800137900	DISUCO LTDA	01/04/1998	31/07/1998	\$320.000	15,43	0,00	0,00	15,43
32527266	MONTOYA OSORIO MARTH	01/10/2000	31/12/2000	\$260.106	12,86	0,00	0,00	12,86
32527266	MONTOYA OSORIO MARTH	01/01/2001	31/12/2001	\$286.000	51,29	0,00	0,00	51,29
32527266	MONTOYA OSORIO MARTH	01/01/2002	31/12/2002	\$346.000	51,43	0,00	0,00	51,43
32527266	MONTOYA OSORIO MARTH	01/01/2003	31/01/2004	\$412.500	55,57	0,00	0,00	55,57
32527266	MONTOYA OSORIO MARTH	01/02/2004	30/09/2005	\$438.400	85,43	0,00	0,00	85,43
43056956	ZULUAGA JARAMILLO GL	01/08/2008	31/01/2009	\$553.000	25,71	0,00	0,00	25,71
43056956	ZULUAGA JARAMILLO GL	01/02/2009	30/09/2010	\$595.000	85,71	0,00	0,00	85,71
[10] TOTAL SEMANAS COTIZADAS:								777,43
[11] SEMANAS COTIZADAS CON TARIFA DE ALTO RIESGO(INCLUIDAS EN EL CAMPO 10 + "TOTAL SEMANAS COTIZADAS"):								

En ese orden de ideas, podría decirse que la afiliada fallecida no dejó causado el derecho pensional a favor de sus eventuales beneficiarios en aplicación del art. 46 de la ley 100 de 1993 modificado por el art. 12 de la Ley 797 de 2003, y por ello se pasará a estudiar, si este derecho se causó en aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa que se solicita en la alzada.

El principio de la condición más beneficiosa

Frente al tema, debe recordarse que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha definido el criterio de aplicación del principio de condición más beneficiosa, explicando que, al ser excepcional, su aplicación, necesariamente, es restringida y temporal, es decir, que no es dable emplearla con un carácter indefinido.

Ha explicado la Corte que, en los casos en que la contingencia (en este caso la muerte) acontece en vigencia de la Ley 797 de 2003 y se pretende la aplicación de dicho principio no resulta admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pasado en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regularía el caso. Esta

tesis ha venido sosteniéndose, refrendándose y reiterándose por la Sala Laboral de la Corte en las sentencias rad. 32.642 del 9 de diciembre de 2008, SL7275-2015, SL7205-2015, SL6362-2015 y la SL4650-2017 – con radicación N° 45.262 del 25 de enero de 2017.

En esta última providencia, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dejó en claro que solo era posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jurídicos hasta el 29 de enero de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa legítima, para garantizar y proteger, de forma interina pero suficiente, la cobertura al sistema general de seguridad social frente a la contingencia de la muerte, bajo la égida de la condición más beneficiosa. Después de allí no sería viable su aplicación, pues este principio no puede convertirse en un obstáculo de cambio normativo y de adecuación de los preceptos a una realidad social y económica diferente, toda vez que es de la esencia del sistema el ser dinámico, jamás estático. Expresado en otro giro, durante dicho periodo (29 de enero de 2003 – 29 de enero de 2006), el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 continúa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condición más beneficiosa para las personas con expectativa legítima, ulterior a ese día opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional. Estimó la Corte que no podía pasarse por alto que esta franja de tres años, a más de tornarse razonable y proporcional favorece, a quienes tenían dicha situación concreta al momento del tránsito legislativo.

En síntesis, de acuerdo con el criterio jurisprudencial abordado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no resulta procedente aplicar el principio de la condición más beneficiosa para aplicar una norma distinta a la inmediatamente anterior, dado que la causante falleció en fecha posterior al 29 de enero de 2006.

Con base en lo anterior, pasa esta sala a analizar si en este caso en concreto, y conforme a la tesis de la jurisprudencia constitucional, se cumplen o no con las circunstancias para dar el salto normativo y aplicar al sub judice el Decreto 758 de 1990, que es el argumento en el cual se erige la apelación formulada por la apoderada judicial de la parte demandante.

Debe decirse en principio que, si bien el órgano de cierre en la especialidad laboral es la Corte Suprema de Justicia, esta Sala de Tribunal no desconoce la tesis que de manera simultánea, ha venido sosteniendo la CORTE CONSTITUCIONAL frente al principio de la condición más beneficiosa, en innumerables sentencias, donde ha expresado su criterio frente al tema, sosteniendo que, no solo la norma pensional vigente (Ley 797 de 2003) o la inmediatamente anterior (Ley 100 de 1993), sino incluso la antecedente a esta última (Decreto 758 de 1990) puede aplicarse a una solicitud de pensión de sobrevivientes, en la medida en que la persona haya cumplido con la densidad de semanas de cotización previstas en este último antes de expirar su periodo de vigencia. (Ver entre otras las sentencias T-401 de 2015, T-464 de 2016, T-084 de 2017, T-235 de 2017, T-294 de 2017 y T-378 de 2017, criterio jurisprudencial del que solicita su aplicación la parte recurrente, toda vez que la afiliada fallecida registra en su historia laboral con más de 300 semanas cotizadas al 1° de abril de 1994 (365,01 semanas), satisfaciendo así la densidad mínima de cotizaciones que otrora exigía los arts. 6° y 25 del acuerdo 049 de 1990.

Tipo de Documento:	Cédula de Ciudadanía	Fecha de Nacimiento:	10/08/1961
Número de Documento:	43056956	Fecha Afiliación:	05/06/1984
Nombre:	GLORIA BEATRIZ ZULUAGA JARAMILLO	Correo Electrónico:	globezuja@hotmail.com
Dirección:	CALLE 48A # 102A 38	Ubicación:	
Estado Afiliación:	Retirado por fallecimiento		

RESUMEN DE SEMANAS COTIZADAS POR EMPLEADOR

En el siguiente reporte encontrará el total de semanas cotizadas a través de cada uno de sus empleadores o de sus propias cotizaciones como trabajador independiente, es decir, las que han sido cotizadas desde enero de 1967 a la fecha. Recuerde que la Historia Laboral representa su vida como trabajador, la que usted ha construido mes a mes y año a año.

[1]Identificación Aportante	[2]Nombre o Razón Social	[3]Desde	[4]Hasta	[5]Último Salario	[6]Semanas	[7]Lic	[8]Sim	[9]Total
2012403561	CARLOS MARIO MADRID	05/06/1984	24/01/1985	\$14.610	33,43	0,00	0,00	33,43
4016114509	DISENOS Y CREAC VELS	12/02/1985	08/05/1986	\$17.790	64,43	0,00	0,00	64,43
2016401604	ARRENDAMIENTOS EL FU	30/01/1987	18/01/1989	\$39.310	102,86	0,00	0,00	102,86
2017108384	ESCUELA DE CONDUCCIO	08/03/1989	30/04/1992	\$70.260	164,29	0,00	0,00	164,29

No obstante, mediante la sentencia **SU-005/18**, la Corte Constitucional realizó un ajuste jurisprudencial a la interpretación del principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de sobrevivientes, introduciendo un **TEST DE PROCEDENCIA** que permite valorar las distintas circunstancias que inciden en la eficacia del mecanismo judicial principal e idóneo para la garantía de los derechos que ampara el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, por lo que se establecieron CINCO (5) CONDICIONES para poder superar el test de procedencia, a saber:

Primera condición	Debe establecerse que el accionante pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en uno o varios supuestos de riesgo tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento.
Segunda condición	Debe establecerse que la carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que solicita el accionante afecta directamente la satisfacción de sus necesidades básicas, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas.
Tercera condición	Debe establecerse que el accionante dependía económicamente del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el causante al tutelante-beneficiario.
Cuarta condición	Debe establecerse que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensión de sobrevivientes.
Quinta condición	Debe establecerse que el accionante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Y por ello pasa la Sala a determinar, si el demandante logra satisfacer tales exigencias.

PRIMERA CONDICIÓN: Para acreditar esta condición se requiere que el demandante pertenezca a un grupo de especial protección constitucional o se encuentre en uno o varios supuestos de riesgo. En el caso en concreto como bien lo señaló la juez de primera instancia, no se acreditó que el demandante pertenezca a un grupo de especial protección constitucional, por cuanto no tiene condición de adulto mayor, al contar en la actualidad con 56 años de edad, pues nació el 01 de mayo de 1956, de acuerdo a la cédula de ciudadanía que milita en el PDF 02 folio 17. Tampoco se encuentra acreditado que el demandante se encuentre inmerso en uno o varios supuestos de riesgo tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, desplazamiento, o pobreza extrema, resaltándose en este punto que de acuerdo a la historial laboral emitida por COLPENSIONES, el demandante tiene cotizaciones al sistema de pensiones hasta octubre de 2021, con 1.396 semanas cotizadas y con un IBL de \$2.418.000 - PDF 08 folios 44 ss.

SEGUNDA y TERCERA, referidas a que, en el caso concreto la carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes afectaría la satisfacción de necesidades básicas del actor. Esta sala constata que el demandante no dependía económicamente de su esposa, y por ende dicha prestación no sustituiría el ingreso que aportaba la causante al beneficiario, resaltándose en este punto que el actor en su interrogatorio de parte manifestó de manera clara e inequívoca que siempre ha laborado y aún continuaba laborando, situación que fue corroborada por los testigos LIBIA ELENA HERNANDEZ DE ROJO y ELKIN DE JESUS GOMEZ (conocidos y vecinos de la causante y el demandante), por lo que encuentra esta sala que el reconocimiento económico no se erige en la satisfacción de sus necesidades básicas, esto es, su mínimo vital, por lo que se concluye que el accionante no dependía económicamente de la causante ni antes ni después de su fallecimiento.

En relación con la **CUARTA CONDICIÓN**, si bien los testigos afirmaron que la causante dejó de cotizar al sistema de pensiones debido a sus problemas de salud, pues le fue detectado un cáncer de mama, lo cierto es que sus dichos no tiene ningún soporte médico que acredite tal afirmación.

En lo concerniente a la **QUINTA CONDICIÓN** se pudo establecerse que el accionante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, ya que el fallecimiento ocurrió el 17 de diciembre de 2013 y el actor presentó reclamación el 28 de febrero de 2014, la cual fue negada mediante resolución GNR 193911 del 29 de mayo de 2014, y mediante resolución GNR 65054 del 29 de febrero de 2016, COLPENSIONES reconoció y ordenó el pago por una sola vez de una indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes al señor LUIS FERNANDO TABORDA ÁLZATE, con ocasión del fallecimiento de la señora GLORIA BEATRIZ ZULUAGA JARAMILLO.

Corolario de lo anterior, si en el mejor de los casos esta Sala avalara la aplicación del principio de la condición más beneficiosa con el doble salto normativo al Decreto 758 de 1990, como se pretende en la alzada, debe decirse que el demandante no supera el Test de Procedencia establecido por la Corte

Constitucional en la sentencia SU-005 de 2018, cuyas condiciones son concurrentes entre sí, esto es, que se deben acreditar las cinco (5) condiciones a la vez para poder acceder al beneficio del doble salto normativo. Es por lo anterior que esta Sala confirmará la sentencia absolutoria de primer grado, por las razones aquí expuestas.

COSTAS PROCESALES DE SEGUNDA INSTANCIA

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida, y la desventura del recurso de apelación formulado por la activa, las costas procesales en esta instancia estarán a cargo de **LUIS FERNANDO TABORDA ÁLZATE**, y a favor de **COLPENSIONES**, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del art. 365 del Código General del Proceso, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de QUINIENTOS MIL PESOS M/L \$500.000.

VIII. – DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia objeto de apelación proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, el día 22 de septiembre de 2022, según lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas procesales de segunda instancia a **LUIS FERNANDO TABORDA ÁLZATE**, y a favor de **COLPENSIONES**, y como agencias en derecho se fija la suma de QUINIENTOS MIL PESOS M/L \$500.000.

TERCERO: En su oportunidad procesal, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

CUARTO: SE ORDENA la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada